


GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

TRAZABILIDAD	Denuncia 2019-153543-80864-D Hallazgo No 76238 Oficio de traslado 2019IE00576178 Oficio de asignación 2019IE0079384
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.	PRF-2019-01055
CUN SIREF	AC-80863-2019-28040
ENTIDAD AFECTADA	Ejército Nacional – Batallón de Infantería ASPC 27
CUANTÍA DEL DAÑO	Doscientos cincuenta y siete millones novecientos noventa y ocho mil ciento treinta y dos pesos con sesenta y cinco centavos (\$ 257.998.132,65)
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES	Rulber Yesid del Río Muñoz , identificado con cédula de ciudadanía 79 885.885, en su condición de Oficial De Operaciones entre el 03/08/2015 y el 15/02/2017 Daniela Alexandra Casanova Villarreal , identificada con la cédula de ciudadanía número 1 124 860 660, en su calidad de representante legal -para la época de los hechos- de la contratista Multiservicios Carvajal de Colombia E U Multiservicios Carvajal E.U. , con NIT 900 203 993-5, en su calidad de contratista
TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES	Seguros del Estado S.A. , identificado con NIT 860 009 578-6, por la expedición de la póliza de Cumplimiento No 61-44-101022399. ZLS Aseguradora de Colombia S.A. o Zurich Colombia Seguros S.A. , con NIT 900 846 964-0, por la póliza de manejo de entidades oficiales 000706237137

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	AUTO No. 183
	FECHA: 12 de diciembre de 2019
	Página 2 de 13
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD	

ASUNTO

Procede la Gerencia Departamental Colegiada Putumayo de la Contraloría General de la República, mediante sesión extraordinaria que se registra en acta No. 61 del 12 de diciembre de 2019, en consideración a los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 610 de 2000 y artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, a pronunciarse sobre una solicitud de nulidad presentada en este Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal

FUNDAMENTOS DE COMPETENCIA

La presente actuación se tramita en virtud de la normatividad que a continuación se enuncia

- **Constitución Política de Colombia** en sus **artículos 267 y 268 numeral 5º**, prescriben que la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración corresponde a la Contraloría General de la República
- **Decreto Ley 267 de 2000**, se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República
- **Ley 42 de 1993**, establece la organización de control fiscal financiero y organismos que lo ejercen, artículo 49 la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración
- **Ley 610 de 2000** Trámite de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal
- **Ley 1474 de 2011** Estatuto anticorrupción y la efectividad del control de la gestión pública, modificando parcialmente la Ley 610 de 2000
- **Resolución Orgánica No. 05500** de 04 de julio de 2003, determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, modificada parcialmente por las Resoluciones Orgánicas **No. 5868** de 5 de julio de 2007 y **6497** de 29 de febrero de 2012
- **Resolución Orgánica No. 6541 de 2012**, por la cual se precisan y fijan las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República para el conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control fiscal posterior excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas, la Indagación Preliminar Fiscal, el proceso de Responsabilidad Fiscal y el proceso de Jurisdicción Coactiva y el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	AUTO No. 183
	FECHA: 12 de diciembre de 2019
	Página 3 de 13

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

ANTECEDENTE

El abogado Edgar Zarabanda Collazos, presentó poder otorgado por el representante legal de ZLS Aseguradora de Colombia S.A., para que represente a dicha entidad en este procedimiento administrativo. Adicionalmente, mediante escrito con radicado SIGEDOC No 2019ER0136202 fechado 6 de diciembre de 2019, presenta -entre otras cosas- solicitud de nulidad de todo lo actuado desde el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal No PRF-2019-01055

Las razones en las que apoya su solicitud de nulidad, fueron denominadas "Insuficiencia de requisitos para vincular a ZLS Aseguradora de Colombia S A " y se basan en lo siguiente:

Cita el artículo 40 de la Ley 610 de 2000, así como la sentencia C-648/02 y el concepto OJ-142-2017 de la Oficina Jurídica de este Organismo de Control, para aseverar que esta Gerencia Colegiada *"no atendió lo establecido"* en dicho concepto pues, *"para que proceda la vinculación de la compañía de seguros, es necesario que se determine, en tomador, el asegurado, los funcionarios amparados, vigencia de la póliza, valor o monto por el cual debe responder la aseguradora, riesgo asegurado y vigencia de la póliza "*, concluyendo que no le es dable a esta Gerencia *"efectuar una vinculación en forma genérica"*

Acto seguido, plantea algunos argumentos para solicitar la desvinculación de su representada, los cuales pueden resumirse así:

- a Ya existe una acción contractual, encaminada a obtener el resarcimiento del perjuicio causado a la administración
- b Violación del artículo 4° de la Ley 389 de 1997, pues *"el plazo para realizar la reclamación [sic] a la aseguradora, venció el 31 de diciembre de 2018"*.
- c. Coaseguro.
- d Deducible
- e Cobertura del cargo

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Problema jurídico:

Procede el despacho a decidir si los hechos narrados por el apoderado de la aseguradora, implican una irregularidad que vulnere el debido proceso de esa entidad, para lo cual deberá

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	AUTO No. 183
	FECHA: 12 de diciembre de 2019
	Página 4 de 13

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

tenerse en cuenta que las nulidades procesales, consisten en la ineficacia de los actos procesales que se han producido con violación de los requisitos que la ley ha instituido para la validez de los mismos

Así se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso, como lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia

El caso concreto:

Diremos inicialmente que el control fiscal es una atribución que tiene rango constitucional. El artículo 267 Superior consagra que “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos ”

Por tanto, la función de vigilancia implica la defensa del patrimonio público, como ha señalado la Corte Constitucional

“ la responsabilidad fiscal tiene como principio o razón jurídica la protección del patrimonio económico del Estado, su finalidad no es sancionatoria, puesto que no se orienta a reprimir una conducta reprochable, sino eminentemente reparatoria, dado que pretende garantizar el patrimonio público frente al daño causado por la gestión fiscal irregular; está determinada por un criterio normativo de imputación subjetivo que se estructura con base en el dolo y la culpa grave, y parte del daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del agente”.¹

Por otro lado, la doctrina ha postulado la defensa del patrimonio público como un derecho colectivo que alude a la eficiencia y transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, así como a su utilización de acuerdo con su objeto y la finalidad social del Estado.² En este orden de ideas, más que como una parte del contrato de seguro, la Contraloría General de la República, de conformidad con su misión constitucional, se constituye como víctima de la relación jurídica en el contrato de seguro

¹ Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-340/07 (9 de mayo) M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil

² GÓMEZ LEE Iván Darío. La seguridad jurídica. El caso de la responsabilidad fiscal en Colombia. Bogotá D.C. 2017. Ed. Universidad Externado de Colombia. Páginas 237 y siguientes

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

Corolario de lo anterior, debe indicarse que es reiterada la jurisprudencia que resalta el papel de las compañías aseguradoras en el proceso de responsabilidad fiscal, cuando son vinculadas en calidad de terceros civilmente responsables. Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia C-648 de 2002 manifestó lo siguiente:

“En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad, actúa en cumplimiento de los mandatos de interés general y de finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o bien amparados por una póliza”

[]

La vinculación de las compañías de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una medida legislativa razonable en aras de la protección del interés general y de los principios de igualdad, moralidad y eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad y publicidad de la función pública”

En lo que respecta a la vinculación de las aseguradoras -en calidad de terceros civilmente responsables- a un proceso de responsabilidad fiscal, la Ley 610 de 2000 en el artículo 44 preceptúa:

“VINCULACION DEL GARANTE. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado

La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella”

En el presente caso, esta Gerencia Colegiada cumplió a cabalidad los presupuestos contemplados en la citada norma, cuando vinculó, en calidad de tercero civilmente responsable, a ZLS Aseguradora de Colombia S.A. a este Proceso de Responsabilidad Fiscal. Es así como en el Auto de Apertura del Proceso, se hizo una descripción clara de los hechos que son materia de

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

investigación y, en lo que respecta a las aseguradoras, se indicó claramente *en virtud de qué póliza* se hacía dicha vinculación

“ *se ordenará la vinculación al presente proceso de responsabilidad fiscal, como terceros civilmente responsables, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, a las siguientes aseguradoras:*

Nombre	NIT	Póliza	Riesgo amparado
Seguros del Estado	860 009 578-6	61-44-101022399	Cumplimiento del contrato (entre otros)
Zurich Colombia Seguros S A ³	900 846 964-0	000706237137	Manejo entidades oficiales – Fallos con Responsabilidad Fiscal

[]”

Nótese cómo, al indicar con claridad cuál es la póliza en virtud de la cual se vincula cada aseguradora, dicha entidad tiene la información sobre todas y cada una de las particularidades del contrato de seguro que celebró, tales como el nombre del tomador, el asegurado, los funcionarios amparados, vigencia de la póliza, valor o monto por el cual debe responder la aseguradora, riesgo asegurado, vigencia de la póliza, etc

Tan cierto es lo anotado con anterioridad, que el abogado de ZLS Aseguradora de Colombia S A en su escrito, hace un recuento pormenorizado de los detalles de la Póliza emitida por su prolijada, lo cual implica, sin lugar a dudas, que al indicársele con claridad el número de la misma, se le garantiza su derecho de defensa y contradicción

Valga recordar que la vinculación de las compañías aseguradoras en un Proceso de Responsabilidad Fiscal, se hace en calidad de Tercero Civilmente Responsable, situación jurídica que tiene diferencias sustanciales con la de *presuntos responsables*, que ostentan las demás personas vinculadas al proceso

Habiendo quedado claro que la vinculación de las aseguradoras a este procedimiento administrativo, cumplió los requisitos contemplados en la Ley 610 de 2000, la Gerencia Colegiada se referirá al Concepto OJ-142-2017 que cita el abogado en su escrito, para aclararle que dicho concepto no hace referencia a los requisitos de la vinculación de una aseguradora, sino a los

³ La póliza de manejo de entidades oficiales fue emitida por la Compañía QBE Seguros, que fue adquirida por Zurich Colombia Seguros S A

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	AUTO No. 183
	FECHA: 12 de diciembre de 2019
	Página 7 de 13
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD	

requisitos de un *fallo con responsabilidad fiscal*, cuando los efectos del mismo se hacen extensivos a ese tipo de entidades. Es así como dicho concepto responde a la siguiente pregunta:

“ 1.5 ¿En los **fallos** con responsabilidad fiscal en los cuales se encuentre vinculada una compañía aseguradora en calidad de tercero civilmente responsable, es requisito sine qua non delimitar la cuantía máxima con la cual responde, el asegurador indicando los respectivos porcentajes de los deducibles a cargo del <asegurado, o es suficiente mencionar que la entidad aseguradora debe responder en calidad de tercero civilmente responsable por existir la póliza de manejo global del sector oficial?” (resalta y subraya el Despacho)

Ante lo cual, esa dependencia conceptuó que “*en la providencia de vinculación del tercero civilmente responsable se debe precisar todos los aspectos relevantes que conduzcan a la verdadera indemnización al patrimonio del Estado, sin que sea dable una vinculación del garante en forma genérica, sin entrar a puntualizar las coberturas y exclusiones de la garantía*”

De acuerdo con lo anterior, se reitera, esta Colegiada cumplió a cabalidad con la exigencia -apenas obvia- de no vincular a la Compañía Aseguradora de manera genérica, pues con los elementos de juicio aportados como soporte del hallazgo fiscal que le dio origen al proceso, se consideró viable tal vinculación, *indicando claramente el número de la póliza*, dato suficiente para que la aseguradora conociera los detalles de la misma, como quiera que, precisamente, dicha Compañía la emitió.

Sobra decir que, si la vinculación de las aseguradoras prospera hasta la emisión de un posible fallo con responsabilidad fiscal, en dicho fallo se detallará el alcance de dicha vinculación incluyendo la cuantía por la cual deberán responder los terceros civilmente responsables, tal como se indica en el concepto ya citado.

Otras consideraciones:

El abogado en su escrito plantea -además de la solicitud de nulidad- algunas razones por las cuales considera que su prolijada debe ser desvinculada de esta actuación administrativa. Este Despacho colegiado analizará las mismas, en el momento procesal oportuno.

Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos planteamientos están directamente relacionados con la solicitud de nulidad planteada por el abogado, la Gerencia Colegiada considera oportuno hacer referencia a los mismos.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

Finalidad de la acción fiscal:

Como bien lo indica el apoderado de la aseguradora, la finalidad de la acción fiscal es *resarcitoria*. Por otro lado, es independiente de las demás acciones, como la penal o la disciplinaria, que persiguen fines distintos.

Ahora bien, siendo su única finalidad el resarcimiento de los daños causados al erario, esta acción debe continuar, mientras dicho resarcimiento no haya ocurrido. Solo así podría cesar el procedimiento, tal como lo indica el artículo 16 de la Ley 610 de 2000.

*“En cualquier estado de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o **aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente**”* (subraya el Despacho)


En otras palabras, si se comprueba el resarcimiento pleno del daño, cesará la acción fiscal, cosa que no ha ocurrido hasta el momento.

Prescripción del contrato de seguro:

El apoderado de ZLS Aseguradora de Colombia S.A. alega la violación del artículo 4° de la Ley 389 de 1997, pues “el plazo para realizar la reclamación [sic] a la aseguradora, venció el 31 de diciembre de 2018”.

El mencionado artículo consagra

“En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación.”

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	AUTO No. 183
	FECHA: 12 de diciembre de 2019
	Página 9 de 13

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años”.

Como puede verse, los hechos que son materia de investigación, ocurrieron durante la vigencia de la póliza en virtud de la cual se vinculó a ZLS Aseguradora de Colombia S.A

Con respecto a la fecha de vinculación, es necesario indicar que, atendiendo a los criterios hermenéuticos de *ley especial prefiere a la ley general*, es claro que en los Procesos de Responsabilidad Fiscal se aplican los términos señalados en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y 120 del Estatuto Anticorrupción, que a continuación se transcriben

“Artículo 9° Caducidad y prescripción La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública”.

“Artículo 120. Pólizas Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000” (subraya el Despacho)

Para el Consejo de Estado, de entrada, la discusión sobre el término prescriptivo de la vinculación del garante a los procesos de responsabilidad fiscal, “quedó totalmente zanjada” con la expedición del artículo 120 del Estatuto Anticorrupción, que sujetó dicha vinculación al plazo legal establecido en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

En reciente sentencia⁴, el alto tribunal centró su análisis en determinar si las “acciones” derivadas del contrato de seguro fijadas en el artículo 1081 del Código de Comercio, constituyen o no, una limitante temporal para la declaratoria de responsabilidad fiscal a título de tercero civilmente responsable

Para resolver este problema jurídico, el Consejo de Estado hizo análisis explícito de la línea decisonal trazada por la sección primera, en las sentencias de fecha 18 de marzo de 2010, 17 de junio de 2010, 20 de noviembre de 2014 y 10 de septiembre de 2015; que coinciden en hacer depender la responsabilidad civil de las compañías aseguradoras bajo la limitación de los plazos establecidos en el artículo 1081 del Código de Comercio.


Luego de postular la falta de claridad y certeza de la aludida jurisprudencia en punto a los extremos de partida y de finalización a ser tomados en cuenta para el cómputo de los plazos prescriptivos, afirmó la Sección Quinta que dicha jurisprudencia “no es acertada” y “torna superflua” la adquisición de un contrato de seguro, por cuanto

i) El artículo 9 de la Ley 610 de 2000, contempla un plazo de 5 años para declarar tanto la responsabilidad fiscal de funcionario, como la responsabilidad civil del garante, y solo con dicha declaratoria se materializa el riesgo siendo ello así, no es posible imponer a la Contraloría el plazo señalado en el artículo 1081 del Código de Comercio, porque ella desconocería la regulación explícita contenida en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, ratificada por el Estatuto Anticorrupción

ii) La postura jurisprudencial formulada por la Sección Primera, en sus palabras, “torna inane el contrato de seguro”, porque la Contraloría no tendría los 5 años conferidos por la ley, sino que debería adoptar dicha decisión en dos años, lo que, a juicio del tribunal, “es bastante poco probable que ocurra” (sic)

Ello en lugar de fortalecer el control fiscal, lo debilita y, según el Consejo de Estado, no tendría sentido que las entidades públicas contraten pólizas de seguros, para mitigar el riesgo derivado de la acción fiscal, si cuando ésta se produce ya la póliza esta prescrita. De ser esto así, la vinculación de las aseguradoras como garantes a los PRF, contrario a su objeto, terminaría

⁴ Consejo de Estado, Sección Quinta. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Radicado 2009-287-00. Actor: La Previsora S.A. Demandada: Contraloría General de la República. Fecha: 7 de junio de 2018.

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	AUTO No. 183
	FECHA: 12 de diciembre de 2019
	Página 11 de 13

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

volviéndose un “obstáculo” para el ente de control por el lapso breve de resolución de estos casos en comparación con aquellos donde no es necesario llamar a la aseguradora

Postula el Consejo de Estado, que dicha posición jurisprudencial “no es sólida”, luego de interrogar dicho tribunal acerca de ¿Cuál es la finalidad de contratar con un seguro, si cuando se va a hacer efectivo, ya está prescrito? Para el tribunal de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, esta postura inconveniente condujo justamente a la precisión del término de prescriptivo hecho por el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011

La prescripción regulada por el artículo 1081 del Código de Comercio, se refiere a “las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen” En este sentido, afirmó la alta Corporación, resulta relevante recordar que el procedimiento de responsabilidad fiscal, en el marco del cual se declara civilmente responsable a las aseguradoras, tiene naturaleza administrativa y no judicial y, por tanto, su declaratoria no está limitada por los plazos a los que se refiere dicha norma, en la medida en que no se trata del ejercicio de una acción, sino de la expedición de un acto administrativo que declara la responsabilidad del agente estatal -fiscal- y de la aseguradora -civil-

En consecuencia, “los lapsos regulados por la norma comercial, no constituyen limitante para proferir el acto administrativo declarativo de la responsabilidad civil de las aseguradoras, en el marco de un procedimiento de responsabilidad fiscal, en la medida en que su objeto de aplicación se dirige al ejercicio de “acciones”, lo que no ocurre en este tipo de casos

En suma, en los procedimientos de responsabilidad fiscal, incluso los iniciados antes de la vigencia de la Ley 1474 de 2011, no es posible computar los términos de prescripción con las normas del Código de Comercio, toda vez que la “acción fiscal” no es en realidad una acción propiamente dicha, sino que es un procedimiento que tiene naturaleza netamente administrativa

Esta es, precisamente, la característica que permite que, tanto las aseguradoras declaradas civilmente responsables, como los funcionarios declarados fiscalmente responsables, acudan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a ventilar su pretensión anulatoria frente a tales actos.

En este orden de ideas, los argumentos del apoderado de ZLS Aseguradora de Colombia S A , en lo que respecta a la nulidad del auto de apertura, carecen de vocación de prosperidad


GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

De acuerdo con las consideraciones precedentes, **LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA PUTUMAYO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias

RESUELVE

- PRIMERO:** Reconocerles personería jurídica para actuar como apoderados de ZLS Aseguradora de Colombia S A , en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. **PRF-2019-01055**, a los abogados Edgar Zarabanda Collazos, portador de la T.P 180 590, y Diego Fernando Rodríguez Vásquez, portador de la T.P 167 701, en los términos del poder otorgado por el representante legal de la Compañía.
- SEGUNDO:** NO DECLARAR LA NULIDAD solicitada por el apoderado de ZLS Aseguradora de Colombia S A , en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No **PRF-2019-01055**.
- TERCERO:** Contra esta decisión procede el recurso de apelación, según lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, recurso que deberá ser interpuesto ante este Despacho dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, de acuerdo al artículo 56 de la Ley 610, con las formalidades de que trata el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011
- CUARTO:** **NOTIFICAR** el contenido de esta providencia mediante inserción en Estado, de conformidad con lo establecido por el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011

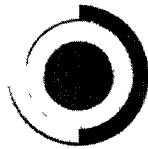
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



HANIER ROBERT HUERTAS CALDERÓN
Contralor Provincial
Directivo de Conocimiento



CARLOS ANDRÉS BONILLA ZAMBRANO
Gerente Departamental de Putumayo



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO No. 183

FECHA: 12 de diciembre de 2019

Página 13 de 13

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL PUTUMAYO
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD

EFREN HUMBERTO LUNA GUERRERO

Contralor Provincial
(Ausente con permiso)

Proyectó Sandra Cecilia Ortega Delgado
Profesional Sustanciadora

Revisó Diego Mauricio Ospina López
Coordinador de Gestión

